

COMUNICADO DE PRENSA

BOLETÍN DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE

PRESS/TE/28
31 de marzo de 1999

EL COMITÉ DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE DE LA OMC EXAMINA LOS PUNTOS RELATIVOS AL ACCESO A LOS MERCADOS, COMPRENDIDAS LAS EVALUACIONES AMBIENTALES, EL ETIQUETADO ECOLÓGICO Y LOS BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO EN LOS SECTORES DE LA AGRICULTURA, LA ENERGÍA, LA PESCA, LA SILVICULTURA Y EL CUERO

El Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) se reunió los días 18 y 19 de febrero de 1999 bajo la presidencia del Embajador Chak Mun See, Embajador de Singapur ante la OMC. El CCMA abordó los puntos de su programa de trabajo relativos al acceso a los mercados. Los Miembros formularon declaraciones en materia de evaluaciones comerciales, etiquetado ecológico y certificación y los beneficios ambientales derivados de eliminar las distorsiones y restricciones del comercio.

En lo que respecta al etiquetado ecológico, el Brasil presentó un nuevo documento sobre sus programas de certificación de los productos de cuero y los productos forestales. Para facilitar el debate en esa reunión, la Secretaría preparó también un nuevo documento sobre los obstáculos técnicos que encuentran los países en desarrollo para acceder a los mercados.

En el marco del punto relativo al acceso a los mercados y los beneficios ambientales que reportaría la liberalización del mercado, los Miembros continuaron ocupándose del examen sectorial de la agricultura, la energía, la pesca, la silvicultura y el cuero. Nueva Zelandia y Zimbabwe presentaron nuevos documentos sobre este punto en general. En cuanto al sector de la agricultura, Noruega, el Japón y el Brasil aportaron documentos sobre su experiencia nacional. También se examinó un nuevo documento, patrocinado por 14 países, sobre subvenciones a las exportaciones agropecuarias. En cuanto al sector de la pesca, Islandia aportó un nuevo documento relativo a su sistema de ordenación de la pesca.

El PNUMA comunicó al CCMA que le había sido renovado el mandato para ocuparse de las cuestiones relativas al comercio y el medio ambiente, medida que se había acordado en la reciente reunión del Consejo de Administración del PNUMA.

Se concedió la condición de observador en el CCMA al Foro del Pacífico Sur.

CONTINÚA

A continuación figura un informe pormenorizado de la reunión de febrero del CCMA. Los documentos que se citan en este Boletín se pueden solicitar a la División de Comercio y Medio Ambiente de la Secretaría de la OMC o consultar en el sitio WEB de la OMC: <<www.wto.org>>.

La próxima reunión del CCMA se celebrará los días 28 y 29 de junio de 1999 bajo la nueva presidencia del Embajador Major, Embajador de Hungría ante la OMC. La reunión de junio, que se ocupará de los puntos del programa de trabajo del CCMA relativos a las vinculaciones entre el programa multilateral del medio ambiente y el programa multilateral del comercio, comprenderá una sesión informativa celebrada con las Secretarías de los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA).

GRUPO RELATIVO AL ACCESO A LOS MERCADOS

Punto 2 La relación entre las políticas ambientales relacionadas con el comercio y las medidas ambientales que tengan efectos comerciales significativos, y las disposiciones del sistema multilateral de comercio

La CE, el Canadá y los Estados Unidos mencionaron la utilidad de las evaluaciones ambientales de los acuerdos comerciales. La CE dijo que había encargado a expertos externos un estudio encaminado a analizar los efectos sobre el medio ambiente de las medidas y los acuerdos comerciales. En los preparativos de la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en noviembre de 1999, la CE anunció además que emprendería una evaluación de los efectos sostenibles de la ronda propuesta.

El Canadá solicitó opiniones acerca de la posibilidad de aunar esfuerzos para emprender un examen ambiental de las próximas negociaciones de la OMC. Dado que el Canadá, al igual que otros países, debía llevar a cabo un examen ambiental de ámbito nacional destinado a estas negociaciones, podría resultar más eficaz trabajar en cooperación. Añadió que también sería importante examinar los AMUMA desde la perspectiva del comercio. A este respecto convendría coordinar las políticas nacionales entre los ministerios de comercio o economía y de los ministerios de medio ambiente.

Los Estados Unidos y el Canadá recordaron sus evaluaciones de la Ronda Uruguay, que podrían obtenerse de la Secretaría de la OMC. Los Estados Unidos señalaron que los Gobiernos que efectuaran evaluaciones podrían facilitarlas para compartir experiencias en el marco de los preparativos para la próxima ronda. La CE y otro Miembro indicaron que en el plano nacional habría que definir el concepto de sostenibilidad en el marco económico y social de cada Miembro.

Punto 3 b) La relación entre las disposiciones del sistema multilateral de comercio y las prescripciones aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado

El Brasil presentó un nuevo documento¹ acerca del desarrollo de sus programas voluntarios de certificación ambiental para a los productos de cuero y los productos forestales. Al presentar este documento de experiencia nacional, el Brasil cumplía con la recomendación que figuraba en el párrafo 185 del Informe (1996) del CCMA² relativa a la importancia de adherirse al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la OMC.

¹ WT/CTE/W/108.

² WT/CTE/1.

Los Miembros acogieron con beneplácito la contribución de Brasil relativa a su experiencia nacional en materia de certificación. Los Estados Unidos señalaron que la tarea que tenía ante sí el Brasil era garantizar la credibilidad de ese tipo de programas. Las CE y los Estados Unidos acogieron con satisfacción la nueva información que aportaba el Brasil con respecto de la participación de los grupos interesados según se desarrollaban los programas. El Canadá observó que la descripción que había presentado el Brasil de su sistema de certificación forestal se ajustaba a los principios establecidos por el Grupo Intergubernamental sobre los Bosques.

Para examinarlo en la presente reunión, la Secretaría preparó además un nuevo documento sobre los obstáculos técnicos que dificultan el acceso a los mercados de los países en desarrollo. Muchos Miembros, entre ellos Argentina; Canadá; Colombia; Corea; Hong Kong, China; Noruega y Uruguay, dijeron que, aunque el documento de la Secretaría mencionaba estudios recientes en los que se llegaba a la conclusión de que las exigencias ambientales no tienen por qué restringir el acceso a los mercados, esa cuestión podría adquirir mayor importancia. Colombia recordó que su documento de experiencia nacional acerca de a los efectos del etiquetado ecológico sobre su sector de floricultura y el documento del Canadá relativo a la silvicultura ponían de relieve algunas de las dificultades que podían surgir a este respecto.³ El CCMA sacaría provecho de datos concretos acerca de sectores en los que se hubieran puesto obstáculos al acceso a los mercados.

Varios Miembros, como el Brasil, los Estados Unidos y el Canadá, insistieron en la importancia del Acuerdo OTC, que dispone que las etiquetas han de formularse de manera transparente y no discriminatoria. La opinión generalizada del CCMA es que, de ser posible, el etiquetado ecológico de carácter voluntario no debe obstaculizar el acceso a los mercados. Uruguay señaló que se debería ayudar a los Miembros a preparar notificaciones OTC sobre la reglamentación relacionada con el medio ambiente, pues de esa manera aumentaría el grado de concienciación y disminuirían sus efectos sobre el comercio.

Noruega sugirió que se examinaran en la OMC las "reglas del juego" en materia de etiquetado ecológico a partir de la labor de otras organizaciones internacionales y, en particular, el PNUMA y la ISO. Noruega y Corea afirmaron que el etiquetado ecológico debería prepararse en función de estas normas acordadas multilateralmente. La Argentina propuso que el CCMA confeccionara una lista recapitulativa de medidas encaminadas a garantizar que la utilización de las etiquetas ecológicas no era discriminatoria, la lista que comprendería los siguientes puntos: transparencia *ex ante* mientras se elaboraran las etiquetas, equivalencia entre normas y trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. Además de asistencia técnica, debería concederse a los países en desarrollo plazos más largos de implantación gradual de las normas con objeto de que se adapten a las nuevas prescripciones ambientales.

El Acuerdo OTC exige que se considere favorablemente la posibilidad de aceptar reglamentos técnicos como equivalentes (artículo 2.7); sin embargo, no existe un requisito similar para las normas voluntarias en el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas del Acuerdo. Nueva Zelandia sugirió a este respecto que se instaurara la equivalencia entre las normas a fin de facilitar el comercio y de evitar las dificultades que entrañaran las normas nacionales para los exportadores. Nueva Zelandia acogió con beneplácito las observaciones formuladas por los Miembros con respecto a su documento dirigido al Comité OTC.⁴ El Canadá dijo que examinaría en el Comité OTC la equivalencia en materia de certificación y de ordenación forestal sostenible. La CE afirmó que la equivalencia era el método más ambicioso de resolver los problemas sobre este particular.

Se estaba recurriendo a consideraciones relacionadas con el ciclo biológico para gestionar los efectos ecológicos y los procesos y métodos de producción (PMP) no relacionados con productos. Tras observar que éstas ya servían de base al etiquetado ecológico y la certificación voluntaria, el Canadá

³ WT/CTE/W/76-G/TBT/W/60 y WT/CTE/W/81-G/TBT/W/61.

⁴ G/TBT/W/88.

sugirió que se fortalecieran las normas de la OMC para dar cabida a dicha evolución. Los Estados Unidos y otros Miembros manifestaron su deseo de oír las observaciones del Canadá al respecto.

La CE indicó que las normas ambientales no se diferenciaban de otras normas. Convendría determinar si el objetivo ambiental de las normas hace que surjan problemas distintos de los que crean las normas en general, una cuestión para cuya respuesta había sido concebido el Acuerdo OTC. La proporcionalidad era decisiva en relación con las normas obligatorias; era posible que las normas tuvieran un mayor efecto, aunque no obligatoriamente desproporcionado, en los países en desarrollo y en las empresas pequeñas y medianas.

El Japón señaló que los países desarrollados deberían prestar asistencia a los países en desarrollo en materia de etiquetado ecológico. Los Estados Unidos mencionaron los beneficios en materia de salud, seguridad y medio ambiente que reportarían las normas a los países que las mantuvieran y a los productores de los países exportadores que las cumplieran; entre esos beneficios figurarían un mejor estado del medio ambiente nacional, un mayor grado de seguridad en el suministro nacional de alimentos, la transferencia de tecnología y un aumento de las cualidades comerciales de los productos en terceros mercados.

La CE, la Argentina, Corea y otros Miembros acogieron con satisfacción las nuevas normas de etiquetado ecológico de la ISO. Hong Kong, China, la ASEAN y otros Miembros dijeron que la participación de los países en desarrollo en las tareas internacionales de normalización era insuficiente; buen ejemplo de ello era la formulación de la serie 14000 de la ISO. A este respecto, Egipto indicó que era importante a) permitir que los países en desarrollo participaran en la fijación de normas; b) prestar asistencia técnica a los países en desarrollo para mejorar su comportamiento ecológico; y c) aumentar la armonización y el reconocimiento mutuo de las etiquetas ecológicas garantizando al propio tiempo que un país no imponga sus normas a otro para conseguir el reconocimiento.

Punto 4 Las disposiciones del sistema multilateral de comercio con respecto a la transparencia de las medidas comerciales aplicadas con fines ambientales a los productos, con inclusión de normas y reglamentos técnicos y prescripciones en materia de envase y embalaje, etiquetado y reciclado

Como acordó el CCMA en marzo de 1998, la Secretaría prepara cada año una base de datos ambientales de la OMC en la que se recopilan las notificaciones sobre medio ambiente relacionadas con el comercio. En la presente reunión el CCMA estableció el glosario de términos de búsqueda con objeto de actualizar esta base de datos para 1998.⁵

Punto 6 El efecto de las medidas ambientales en el acceso a los mercados, especialmente en lo relativo a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, y los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio

Partiendo de la experiencia nacional de los Miembros, el CCMA siguió celebrando el debate sectorial correspondiente a este punto con objeto de impulsar el análisis de los beneficios resultantes para el medio ambiente de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio.⁶ Tras formular observaciones generales sobre el punto 6, los Miembros analizaron los sectores de la agricultura, la energía, la pesca, la silvicultura y el cuero.

⁵ La base de datos ambientales correspondiente a 1997 figura en el documento WT/CTE/W/77.

⁶ Véase el documento de la Secretaría WT/CTE/W/67 y los números 23 y 27 del *Boletín de Comercio y Medio Ambiente*.

Observaciones generales

Australia presentó un nuevo documento⁷ acerca de las posibilidades de que las reformas del comercio brindaran oportunidades infalibles de obtener resultados beneficiosos para todos que contribuyan al logro de los objetivos centrados en el desarrollo y la igualdad social y mejoras comerciales y ambientales. La magnitud de las subvenciones ponía de relieve las posibilidades de obtener esos resultados. Los cálculos relativos a las subvenciones destinadas a cinco sectores principales (energía, transporte, agua, agricultura y pesca) oscilaban entre 870.000 millones y 1 billón de dólares EE.UU. El documento de Australia se centraba en la agricultura y la pesca, sectores donde era elevado el grado de distorsión del mercado y donde despertaban interés los efectos ambientales concomitantes. El documento de Australia determinaba igualmente otros cuantos sectores en los que las crestas arancelarias y la progresividad arancelaria seguían siendo problemas importantes, a los que se debería conceder carácter prioritario en las reformas del comercio. Australia propuso que las reformas del comercio que figuraban en su documento formaran parte de las recomendaciones a la Tercera Conferencia Ministerial.

Para dejar constancia de las inquietudes de África, Zimbabwe aportó un nuevo documento⁸ en el que figuraba la declaración que hizo por su Ministro de Minas, Medio Ambiente y Turismo en el Seminario Regional de la OMC sobre Comercio y Medio Ambiente para el África Subsahariana, celebrado en Harare del 8 al 10 de febrero de 1999. El problema de África consistía en hallar un equilibrio entre liberalización del comercio, protección del medio ambiente y mitigación de la pobreza. Pese a su elevado costo social, los gobiernos de África habían adoptado reformas económicas estructurales centradas en la búsqueda de un crecimiento basado en la exportación a fin de facilitar su integración en el sistema económico mundial. Sin embargo, estas reformas, llevadas a cabo a instancia de instituciones financieras multilaterales con el apoyo de los asociados para el desarrollo de África, sólo podrían obtener los resultados apetecidos si se las respaldaba con un mayor acceso a los mercados de las exportaciones africanas. A Zimbabwe le preocupaba el recurso a medidas de distorsión del comercio, como las crestas arancelarias y la progresividad arancelaria, las subvenciones a la exportación y las medidas unilaterales, dirigidas sobre todo a los productos cuya exportación interesaba a los países en desarrollo, en particular, los de África.

Observaciones sobre el documento de Australia

La Argentina; la ASEAN; el Canadá; los Estados Unidos; Hong Kong, China; Marruecos; Nueva Zelandia; y Uganda fueron algunas de las delegaciones que apoyaron el documento de Australia y que coincidían en que la principal contribución de la OMC era determinar y eliminar los actuales obstáculos al comercio que generaban problemas en las esferas del medio ambiente y el desarrollo. Las ventajas de la eliminación de estos obstáculos al comercio se basaban en la contribución de la liberalización del comercio a una mejor distribución de los recursos. Las reducciones arancelarias también servirían para que los países en desarrollo tomaran parte más activa en el comercio, actualmente en expansión, de productos objeto de mayor elaboración.

Marruecos, Uganda, la ASEAN, el Canadá, la Argentina y otros Miembros se congratularon de la inclusión en el documento de Australia de la dimensión del desarrollo, que reconociera la relación entre la pobreza y medio ambiente; cuantos más recursos económicos tuvieran que dedicar los países en desarrollo a la mitigación de la pobreza, tanto mayor sería la contribución de la OMC a la protección del medio ambiente. Corea afirmó que, en vista de que no son homogéneos ni el nivel de desarrollo económico alcanzado por los distintos países en desarrollo ni sus prioridades en materia de política, no cabía dar por hecho que la liberalización tuviera repercusiones positivas en el medio ambiente.

⁷ WT/CTE/W/105, que desarrolla los temas expuestos por Australia en el documento WT/CTE/W/36 de 1996.

⁸ WT/CTE/W/110.

El Japón agradeció a Australia su documento, que contemplaba la posibilidad de adoptar medidas encaminadas a potenciar los beneficios ambientales derivados de la agricultura. Al Japón le preocupaba que el documento no tuviera suficientemente en cuenta la diversidad de condiciones naturales y que no analizara debidamente los efectos ecológicos a largo plazo debidos a los desplazamientos de la producción en el sector de la agricultura. Preocupaba al Japón la observación de Australia de que, por lo general era más eficaz eliminar las políticas causa de distorsión. Se daban casos en que, a falta de otras medidas adecuadas, había que recurrir a medidas ambientales, fuera cual fuera su eficacia.

Noruega y el Japón opinaban que hacía falta cierto grado de ayuda interna vinculada con la producción en la medida en que la multifuncionalidad iba acompañada de la producción agropecuaria. Para mantener el carácter multifuncional del sector de la agricultura era fundamental combinar diversas medidas de política, comprendida una ayuda reconectada adecuada. Noruega coincidía con el documento de Australia cuando afirmaba que cabía justificar determinadas subvenciones por motivos de eficiencia o equidad en lo que atañe a remediar las disfunciones del mercado, premiar las externalidades positivas o cumplir con los objetivos sociales, aspecto éste que se describía en el documento de Noruega. Al reconocer que era necesario orientar las medidas de política agrícola lo más posible a fin de reducir al mínimo las distorsiones del comercio y evitar posibles incompatibilidades entre las medidas, Noruega advirtió del peligro que supone limitar el alcance y la flexibilidad de las medidas de política ambiental.

La principal conclusión que había sacado la CE del documento de Australia era que no existían soluciones del todo positivas o del todo negativas. El carácter multifuncional de la agricultura era ejemplo de la manera en que la modificación de una política comercial podía tener efectos negativos y positivos según la perspectiva que se adoptara. Para conseguir que se materializaran plenamente los efectos de la liberalización, que no tenían carácter automático, la CE estaba procediendo a una amplia evaluación de los efectos de la próxima fase de la liberalización de la OMC.

El Japón, Suiza, Corea, Turquía, Noruega y la CE afirmaron que, aunque era útil realizar un análisis sectorial en el marco de este punto, existían relaciones complejas como, por ejemplo, las que existen entre la producción agropecuaria y el medio ambiente. Era difícil determinar el origen de los diversos efectos ambientales positivos y negativos, y sacar al respecto conclusiones intersectoriales. En consecuencia, el CCMA debía adoptar un enfoque equilibrado y global al debatir estas cuestiones. Turquía dijo que el CCMA debía ampliar los sectores objeto de examen.

Observaciones sobre el documento de Zimbabwe

Los Miembros acogieron con agrado el documento que presentaba Zimbabwe. Algunos, como Uganda, la ASEAN y Marruecos, agradecían el hecho de que Zimbabwe se centrara en las cuestiones que preocupaban a los países en desarrollo. Los Estados Unidos, la CE, Nueva Zelandia, el Canadá y otros Miembros acogieron con satisfacción el mayor grado de participación de los países en desarrollo en el CCMA, en los preparativos de la Tercera Conferencia Ministerial y en los simposios de alto nivel de marzo de 1999. La CE, Uganda y otros Miembros mencionaron el valor que encerraban los seminarios regionales de la OMC sobre Comercio y Medio Ambiente en lo que respecta a la concienciación en torno a las cuestiones planteadas en esta esfera.⁹

Como se exponía en los documentos de Zimbabwe y Australia, varios Miembros afirmaron que en relación con este punto el CCMA debía estudiar la manera de ampliar el acceso a los mercados. Partiendo de las disciplinas existentes, como por ejemplo el Acuerdo OTC y el Acuerdo MSF, habría que examinar en el plano horizontal las nuevas prescripciones ambientales, que reducían el acceso a los mercados, sobre todo de los países en desarrollo. La CE aludió a la tensión mencionada en el documento de Zimbabwe con respecto a la legitimidad de los objetivos nacionales en materia de higiene y seguridad ambientales y a la preocupación, manifestada sobre todo por los países en desarrollo, en el sentido de que estos objetivos van

⁹ Consúltase el número 26 del *Boletín de Comercio y Medio Ambiente* para obtener información sobre los seminarios regionales de la OMC.

a servir de excusa para justificar el proteccionismo. Esa tensión había surgido al debatir la cuestión del etiquetado ecológico. La CE juzgaba que las preocupaciones expresadas por Zimbabwe aportaban un elemento crucial para propiciar el avance del debate centrado en el comercio y el medio ambiente. Este año brindaba cierta oportunidad de fomentar la confianza entre los Miembros de la OMC con respecto a la posibilidad de aclarar la manera en que se puede actuar para conseguir objetivos legítimos sin alimentar la inquietud suscitada por el proteccionismo encubierto.

Agricultura

Noruega presentó un nuevo documento¹⁰ en el que se determinaban los beneficios ambientales procedentes del sector agropecuario de Noruega y la correlación que existía entre el alcance de la degradación del medio ambiente debida a la producción agropecuaria y los niveles aplicados de apoyo a la agricultura. Aunque tenía carácter preliminar, el análisis de Noruega no indicaba que el desplazamiento de la producción de los países de alto nivel de apoyo a los de bajo nivel, consecuencia probable del aumento de la liberalización del comercio, fuera a propiciar una reducción generalizada de la degradación del medio ambiente.

El Japón presentó un nuevo documento¹¹ en el que argumentaba que había de mantenerse un nivel de producción agropecuaria adecuado a fin de potenciar los beneficios ambientales derivados de la agricultura, como por ejemplo prevenir la erosión de los suelos, los desprendimientos de tierras y las inundaciones, conservar los recursos hídricos, preservar la biodiversidad, mantener el paisaje y disponer de espacios de esparcimiento. El carácter multifuncional de la agricultura dependía de las condiciones naturales y sociales de cada país; las políticas apropiadas en materia de multifuncionalidad variarían en función de estas condiciones y de los métodos de producción agropecuaria.

Uruguay presentó un nuevo documento,¹² patrocinado por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Paraguay, Tailandia y Uruguay, en el que se aducía que el CCMA debería analizar los beneficios ambientales derivados de la eliminación de las restricciones y distorsiones del comercio, sobre todo en lo relativo a las subvenciones a la exportación. Ese documento (que en adelante se denominará "documento de las subvenciones a la exportación") ponía de manifiesto las repercusiones negativas de las subvenciones a la exportación para las oportunidades comerciales de los países. Estas subvenciones deprimían los precios en el plano internacional, fomentaban la volatilidad de los mercados y hacían mella en la producción agropecuaria y los ingresos rurales de los países en desarrollo. Además, los excedentes de producción debidos a este tipo de subvención no cumplían ningún objetivo ambiental. Así pues, la eliminación de las subvenciones a la exportación habría de tener carácter prioritario para la OMC en las futuras negociaciones, pues contribuiría de manera apreciable al desarrollo sostenible.

El Brasil presentó un nuevo documento¹³ acerca de los beneficios ambientales de la liberalización del comercio en el Brasil. Las mejoras en el acceso a los productos agropecuarios básicos habían sido motivo de que aumentaran los ingresos agrícolas, que constituían el principal mecanismo de inversión en la investigación y en el desarrollo de tecnologías y prácticas compatibles con el medio ambiente. El Brasil señaló que el carácter multifuncional de la agricultura, cuestión que se debatía en el Comité de Agricultura de la OMC, no debía servir de argumento para justificar el empleo de subvenciones. Al contrario, eran los elementos no comerciales de la agricultura los que justificaban la liberalización en cuanto instrumento de fomento del desarrollo sostenible que se estipula en el *Programa 21*.

¹⁰ WT/CTE/W/100.

¹¹ WT/CTE/W/107, documento que había sido presentado informalmente en la reunión del CCMA celebrada los días 26 y 27 de octubre de 1998.

¹² WT/CTE/W/106.

¹³ WT/CTE/W/109.

Los Miembros acogieron con beneplácito la contribución de estos nuevos documentos dedicados al sector de la agricultura.

Observaciones sobre el documento de Noruega

Corea coincidía con el documento de Noruega en que los precios deberían reflejar todos los gastos y beneficios y en que era fundamental llevar a cabo una valoración adecuada de los bienes públicos a fin de analizar los efectos ambientales de la agricultura. Corea respaldaba el enfoque mundial del documento de Noruega, según el cual en los países donde el nivel de apoyo era elevado las prescripciones en materia de plaguicidas eran más rigurosas y la capacidad de garantizar su cumplimiento estaba más desarrollada. Noruega había demostrado que, en comparación con los países donde el nivel de apoyo era reducido, los países donde el nivel de apoyo era elevado habían reducido en general el empleo de fertilizantes nitrogenados y fosfatados y que era posible que la expansión de la agricultura hubiera tenido repercusiones negativas en la biodiversidad, casi con seguridad a consecuencia de la liberalización del comercio en los países donde el nivel de apoyo era reducido. El mayor grado de protección del medio ambiente no tenía por qué guardar relación con un bajo nivel de ayuda a la agricultura.

El Japón dijo que el documento de Noruega corroboraba el argumento del Japón de que el paisaje agrícola y la conservación de la biodiversidad eran bienes públicos derivados de la agricultura. El Japón señaló que hacía falta llevar a cabo una evaluación a largo plazo de los efectos ambientales de los desplazamientos de la producción agropecuaria debidos a la liberalización del comercio, como el efecto de las nuevas formas de explotación del suelo en países importadores y exportadores. El proceso de reforma de la agricultura debería dar cuenta debidamente de los factores no comerciales.

La Argentina, la ASEAN, el Canadá y Nueva Zelandia coincidían con la declaración del documento de Noruega, según el cual las fuerzas del mercado no bastaban para garantizar una óptima distribución de los recursos si los precios no reflejaban los costos privados y sociales de la producción. En el documento de la Argentina¹⁴ se había postulado que para poner coto a las disfunciones del mercado habría que eliminar las disfunciones de las políticas que impedían que los precios reflejaran los costos privados de la producción. La Argentina dijo que esa medida sería un primer paso en las políticas ambientales destinadas a internalizar los costos y los beneficios ambientales.

Varios Miembros hicieron observaciones sobre el empleo que hacía Noruega de pagos directos a los productores agropecuarios conectados con los pagos a la producción, lo cual fomentaba un exceso de producción que podía llevar a subvenciones a la exportación distorsionadoras del comercio y a un uso más intenso de insumos en el proceso de producción. Esto último aumentaba degradación del medio ambiente. Así, por ejemplo, en el documento de Noruega se sostenía que la actividad agropecuaria podría ser motivo de erosión de los suelos y de mala calidad del agua. Para hacer frente a esta tendencia de la producción, los Estados Unidos señalaron que ellos ofrecían incentivos a los agricultores para que adoptaran prácticas inocuas para el medio ambiente.

Nueva Zelandia, la Argentina y el Canadá coincidían en que para potenciar al máximo el suministro de bienes públicos hacían falta concentrar las políticas de ordenación de los recursos, que no tenían por qué distorsionar el comercio. El Canadá dijo que en los países en que el público pagaba a los productores las externalidades ambientales positivas de la agricultura, ese pago debería estar desconectado de la producción y guardar relación directa con el beneficio apetecido. Si se deseaba mantener las paredes de piedra en el paisaje agrícola, resultaría más eficaz pagar a los agricultores para que las mantuvieran que subvencionar los alimentos que produjeran dichos agricultores. Aunque los Estados Unidos juzgaban también que las políticas agropecuarias selectivas constituían el mejor método de garantizar la aplicación de prácticas ambientales mejoradas, había que distinguir entre apoyo conectado genérico y programas de conservación que aun sirviéndose de un mecanismo de pago directo proporcionaban genuinos valores estéticos y recreativos relacionados con el medio ambiente.

¹⁴ WT/CTE/W/97, véase el N° 27 del *Boletín de Comercio y Medio Ambiente*.

Varios Miembros observaron que el Acuerdo sobre la Agricultura permita cierto nivel de apoyo conectado con la producción agropecuaria siempre que dicho apoyo no sobrepasara en el 5 por ciento el valor de la producción de los países desarrollados y en el 10 por ciento de los países en desarrollo. En el Acuerdo sobre la Agricultura también se contemplaba el derecho de los Miembros a aplicar políticas de compartimento verde en relación con diversos objetivos no comerciales, como la protección del medio ambiente.

La Argentina, Nueva Zelandia, la ASEAN y otros Miembros afirmaron que no debía hacerse uso del medio ambiente ni del concepto de multifuncionalidad de la agricultura para justificar el mantenimiento de distorsiones del comercio. La Argentina señaló que aunque los países en desarrollo habían debido hacer frente a una crisis económica que había deprimido los precios de los productos, en 1997 Noruega había lanzado al mercado internacional, en régimen de dumping, 32.335,4 toneladas de exportaciones agropecuarias subvencionadas. Esta práctica había de ponerse en paralelo con la declaración de Noruega, según la cual sólo en el caso de que en los precios se reflejaran todos los costos de producción podrían propiciar los mercados una distribución óptima de los recursos.

Hungría observó que el documento de Noruega trataba de los efectos ambientales negativos derivados del posible aumento del volumen de transporte que se produciría al liberalizar el comercio de productos agropecuarios. Aunque ese argumento también era válido para los productos industriales, no se pusieron objeciones a la liberalización aduciendo tales argumentos. No se justificaban las diferencias de trato que se daba a la liberalización en una y otra categoría.

Australia, el Canadá, Nueva Zelandia y la ASEAN coincidían con Noruega en que había que tratar sus datos con precaución y mencionaron ejemplos de datos que divergían de los que figuraban en el documento de Noruega.

Observaciones sobre el documento del Japón

Corea, el Japón y Noruega coincidían en numerosas cuestiones planteadas en el documento del Japón. El valor del sistema de defensa contra las inundaciones que proporcionaban los arrozales de Corea se situaba por encima de 10.000 millones de dólares EE.UU., cifra superior al valor de la producción total de arroz. El análisis del Japón a este respecto ponía de manifiesto la realidad de Corea. El CCMA no debería pasar por alto la relación entre el aumento de la migración del campo a la ciudad debida al descenso de la actividad agropecuaria ni los efectos de las crisis económicas que atravesaban países como Corea. Cabía suponer que la aceleración de la liberalización agropecuaria agravaría los problemas sociales, pues todo trastorno que pudiera surgir en este sector tendría efectos negativos en el tejido social de Corea. Corea puso de relieve la importancia de llevar a cabo un análisis general de los efectos de la liberalización agropecuaria con objeto de determinar su repercusión en los precios de los alimentos, la seguridad alimentaria y la estabilidad social.

Noruega coincidía con el documento del Japón en que la relación entre el medio ambiente y la liberalización del comercio de productos agropecuarios era un asunto complejo. Habría que tener en cuenta la diversidad de condiciones naturales y de métodos de producción al examinar las medidas adecuadas para mantener los beneficios ambientales obtenidos a la par con la agricultura. Al ampliar el ámbito de los debates habría que hacer hincapié en los aspectos de la multifuncionalidad de la agricultura que reportaban beneficios ambientales.

La Argentina señaló que la mayor parte de la producción de arroz del Japón tenía lugar en tierras bajas. Dado que los arrozales situados en tierras bajas tenían poca importancia en la defensa contra las inundaciones, no era posible justificar las subvenciones de apoyo a la producción por motivos de este tipo de cobertura "multifuncional". Ni la Argentina ni Australia entendían cómo podía sostener el Japón que la liberalización del comercio fuera a ser causa de que la producción se concentrara en los países exportadores de productos agropecuarios. La situación era distinta en el caso de los países en desarrollo. Cuando los países desarrollados subvencionaban la producción interior y acumulaban enormes cantidades de excedente que luego eran objeto de dumping en el mercado internacional, se concentraba la producción.

CONTINÚA

Australia dijo que la reducción del volumen de la producción agropecuaria en los países de elevado nivel de apoyo podrían complementarse con políticas ambientales selectivas a fin de obtener directamente los beneficios que el Japón relacionaba con los arrozales.

Los Estados Unidos manifestaron que muchos países habían acumulado experiencia con programas encaminados a conservar el agua y los suelos y a ocuparse de la multifuncionalidad de la agricultura reduciendo a un mínimo la distorsión del comercio. Australia señaló que el análisis del Japón iba en contra de la convicción general del CCMA acerca de la complejidad de los vínculos entre el comercio de productos agropecuarios, la producción y el medio ambiente, y la interacción de estos factores con la elaboración de políticas ambientales.

Observaciones sobre el documento de las subvenciones a la exportación

Varios Miembros formularon observaciones sobre los efectos de las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios. La ASEAN dijo que en los países donde era elevado el nivel de apoyo las subvenciones a la exportación servían para obligar a los países desarrollados a incrementar la actividad minera, y eso tenía un impacto mayor en el medio ambiente. Así pues, las repercusiones negativas que tenían en el medio ambiente las prácticas fomentadas por las distorsiones del comercio afectaban a productores eficientes de los países en desarrollo que no concedían subvenciones. Nueva Zelandia, Australia y la Argentina dijeron que la concesión de subvenciones a la exportación no reportaba beneficios ambientales. Este tipo de política consumía elevadas sumas de dinero que, de otro modo, podría destinarse a prioridades de carácter público, como la protección del medio ambiente. En resumen, las subvenciones a la exportación, de las que se sirven principalmente determinados países desarrollados, estorbaban la capacidad de los productores eficientes de otras zonas del mundo en lo que respecta a propiciar el desarrollo sostenible.

Bolivia, el Brasil, la ASEAN, Panamá y Zimbabwe recordaron que en el *Programa 21* se reconocía que un sistema de comercio multilateral abierto, equitativo, seguro, no discriminatorio y predecible representaba un beneficio para todos los interlocutores comerciales. Conformes con esa idea, muchos países en desarrollo habían liberalizado el comercio de productos agropecuarios, y pese al desequilibrio estructural que existe en este sector entre países desarrollados y países en desarrollo, habían fundado sus políticas agrícolas en una ventaja comparativa. En caso de que el empleo continuo de subvenciones a la exportación en los países desarrollados acentuara este desequilibrio en lugar de eliminarlo, la conexión entre comercio y medio ambiente perjudicaría a los países pobres. También se observó que la eliminación de las subvenciones a la exportación era conveniente desde el punto de vista del comercio, independientemente de las razones ambientales.

La Argentina, Nueva Zelandia, los Estados Unidos y otros Miembros afirmaron que eliminar las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios debería ser una cuestión prioritaria para la OMC en las próximas negociaciones. En preparación de la Tercera Conferencia Ministerial, el CCMA debería presentar una recomendación inequívoca para que se eliminaran las subvenciones a la exportación en interés del comercio y del medio ambiente.

Nueva Zelandia preguntó cómo podían perseguir eficazmente los países desarrollados objetivos centrados en la asistencia al desarrollo cuando las políticas comerciales actuaban en detrimento del potencial de desarrollo de los países beneficiarios de la ayuda. Nueva Zelandia mencionó la declaración de Maurice Strong relativa a la contribución que supondría la eliminación de las subvenciones para la aplicación del *Programa 21* y señaló que en varios estudios empíricos se llegaba a la conclusión de que los consumidores y los contribuyentes ganarían más con la eliminación de las subvenciones que lo que perderían los agricultores.

Egipto respaldó la mayor parte de los argumentos que justificaban la eliminación de las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios en vista de los beneficios ambientales que podría reportar tal medida. Sin embargo, los excedentes de productos agropecuarios proporcionaban a los países en desarrollo importadores netos de alimentos un mecanismo capaz de garantizar su seguridad

CONTINÚA

alimentaria con el escaso poder adquisitivo de que disponían, teniendo presente, además el grado poco satisfactorio de cumplimiento de la decisión de la OMC sobre los países en desarrollo importadores netos de alimentos. Australia dijo que hasta los países en desarrollo importadores netos de alimentos tenían productores nacionales a los que afectaba el descenso de los precios aun cuando no exportaran. Parecía que las preocupaciones de Egipto al respecto tenían que ver con la seguridad alimentaria, cuestión vinculada principalmente a la pobreza. El hecho de que Australia fuera para Egipto un importante proveedor de trigo se debía supuestamente a que ofrecía su trigo a un precio justo; era significativo que Australia no aplicara subvenciones a la exportación.

El Japón, la CE y Turquía opinaban que, en lugar de centrarse exclusivamente en las distorsiones del comercio que provocan determinadas políticas agrícolas, como por ejemplo las subvenciones a la exportación, el CCMA debería examinar sus efectos y objetivos generales teniendo en cuenta el carácter multifuncional de la agricultura. Aunque el documento de las subvenciones a la exportación planteaba cuestiones pertinentes a las próximas negociaciones en la esfera de la agricultura, Hungría, la CE y Suiza señalaron que en el análisis debían haber figurado otras medidas que también tenían efectos ambientales negativos, como por ejemplo los créditos a la exportación y determinadas actividades relacionadas con la exportación llevadas a cabo por las empresas comerciales del Estado.

Observaciones sobre el documento del Brasil

Varios Miembros apoyaron la conclusión del documento del Brasil de que las subvenciones a la agricultura tenían efectos negativos en cuanto a reducir la pobreza rural y de que la adopción de nuevos métodos de producción que tuvieran presente los aspectos agronómicos, sociales, económicos y ecológicos favorecía el desarrollo sostenible. Una de las cuestiones importantes señaladas por el Brasil era que el aumento del ingreso agrícola guardaba una relación directa con la implantación de un sistema de ordenación agrícola sostenible. Mediante políticas ambientales adecuadas de ámbito nacional, los aumentos de los ingresos servirían para que la protección del medio ambiente y la liberalización del comercio se prestaran apoyo mutuo.

Panamá, Uganda, la ASEAN y la Argentina fueron algunas de las delegaciones que agradecieron al Brasil su documento dedicado a la relación que guardan la pobreza, el desarrollo y el medio ambiente. Los debates sobre temas no comerciales debían dar cabida a la mitigación de la pobreza, motivo legítimo de preocupación. El Canadá y otros Miembros apoyaron el argumento principal del Brasil en el sentido de que las preocupaciones no comerciales relativas al sector de la agricultura no deberían servir para justificar las restricciones y distorsiones del comercio.

Los Estados Unidos coincidían con el documento del Brasil en que, aunque no entrañara automáticamente la protección del medio ambiente, la liberalización del comercio suponía un paso en la dirección adecuada. Varios Miembros señalaron al respecto que para lograr que el comercio y el medio ambiente se prestaran apoyo mutuo, la liberalización del comercio habría de complementarse siempre con políticas ambientales racionales.

Bolivia apoyó el documento del Brasil y destacó la importancia que tienen en Bolivia las cuestiones ambientales, como lo demuestra el hecho de que este país haya sido uno de los primeros países en desarrollo en crear un Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de conformidad con el *Programa 21*.

El Japón agradeció que en el documento del Brasil se reconociera la necesidad de abordar la multifuncionalidad de la agricultura y señaló que el nivel de apoyo a la agricultura no influiría en su rendimiento ecológico. El documento demostraba que con el cultivo de la soja el Brasil practicaba actividades de conservación, con labranza y sin labranza, gracias a métodos agropecuarios ecológicamente sostenibles. El Brasil se equivocaba al sostener que todas las subvenciones a la agricultura eran perjudiciales para el medio ambiente; existían subvenciones bien orientadas en el plano ecológico, como las que fomentaban la rotación de cultivos y la labranza de conservación.

CONTINÚA

Noruega indicó que la conclusión del Brasil de que podían producirse externalidades negativas en los países donde el nivel de apoyo es alto o bajo confirmaba los resultados obtenidos por Noruega. El documento del Brasil insistía en la liberalización del comercio y el desarrollo económico como mecanismos de rehabilitación económica y de desarrollo sostenible. Sin embargo, las relaciones entre la liberalización del comercio, el desarrollo económico, los beneficios ambientales y el aprovechamiento sostenible de los recursos eran más complejas de lo que sostenía el Brasil.

La CE dijo que la relación entre las actividades agropecuarias y la protección del medio ambiente era un aspecto en que los conocimientos de la comunidad mundial habían evolucionado rápidamente en los 20 últimos años. Al finalizar la Ronda Uruguay se concertaron algunos compromisos de reducir el apoyo y la protección, sólidamente basados en el convencimiento de que era necesario proteger el medio ambiente. La CE observó que se estaban revisando los compromisos existentes de la OMC a fin de reducir la ayuda interna y aumentar el acceso a los mercados y la competencia de las exportaciones, inclusive los créditos y las subvenciones a la exportación.

Energía

Turquía recordó que un área de posibles repercusiones ambientales era el sector de la energía, que, aparte de los efectos ambientales directos, tenía efectos indirectos al utilizarla en otros sectores. La internalización de las externalidades ambientales correspondientes a este sector era decisiva para instaurar políticas ecológicamente racionales. Para fomentar dicho tipo de políticas deberían reestructurarse los incentivos fiscales, como los impuestos y los gravámenes. Turquía agradecía los intentos de explotar fuentes de energía alternativa y renovable que reducirían el grado de los cambios climáticos y de la degradación del medio ambiente ocasionados por fuentes de energía contaminantes.

Pesca

Islandia presentó un nuevo documento¹⁵ acerca de su sistema de ordenación de la pesca. El éxito del sistema de ordenación de la pesca en Islandia se debía a que no sólo se basaba en rigurosas prescripciones ambientales, sino además en la eficiencia económica; el sistema estaba orientado al mercado y carecía de subvenciones oficiales. La experiencia de Islandia indicaba que a todos los países les resultaba difícil mantener un régimen sostenible de ordenación de la pesca en un mercado mundial caracterizado por un exceso de capacidad. El exceso de capacidad de la flota pesquera mundial era la principal causa del agotamiento de las poblaciones de peces. La opinión general era que las subvenciones oficiales y otros elementos distorsionadores del mercado eran los principales causantes de ese exceso de capacidad. Así pues, la eliminación de las subvenciones oficiales y demás elementos distorsionadores facilitaría el desarrollo sostenible en el sector pesquero.

Los Miembros agradecieron a Islandia su documento, que presentaba un ejemplo concreto de los beneficios ambientales que reportaban las políticas de ordenación sostenible. También se mencionó la sección del documento de Australia dedicada a la pesca.¹⁶ Nueva Zelandia y los Estados Unidos coincidían con Islandia en que era difícil mantener políticas sostenibles ante el exceso de capacidad de las flotas pesqueras mundiales. En este Año Internacional de los Océanos, Nueva Zelandia, Australia y los Estados Unidos hicieron un llamamiento para que se eliminasen las subvenciones a la pesca, que distorsionaban el comercio. Australia y los Estados Unidos declararon que la comunidad internacional debía colaborar para garantizar un aprovechamiento sostenible de las poblaciones de peces del mundo.

Noruega y el Canadá estaban de acuerdo en que el excedente de capacidad de las flotas pesqueras mundiales tenía una estrecha relación con una ordenación inadecuada. Ahora bien, algunas subvenciones podrían influir en la reducción de las flotas pesqueras y en la renovación de las poblaciones de peces. El Canadá y otros Miembros apoyaban estas subvenciones siempre que fomentaran el aprovechamiento

¹⁵ WT/CTE/W/103 y Corr.1.

¹⁶ WT/CTE/W/105, presentado en la sección de "observaciones generales" correspondientes al punto 6.

sostenible de los recursos pesqueros. El Canadá señaló también los beneficios ambientales que reportaría la eliminación de las medidas arancelarias y no arancelarias en este sector.

Al Japón le preocupaban las conclusiones de Islandia y el carácter neutro de sus datos. El Japón y Corea estuvieron en desacuerdo con la conclusión de que las subvenciones a la pesca fomentaban el exceso de explotación pesquera y que la reducción de la pesca permitiría la protección de los recursos pesqueros. En vista de que la mala ordenación de la pesca daba lugar al exceso de explotación, era imprescindible adoptar determinadas medidas de apoyo encaminadas a fomentar la conservación de las poblaciones de peces. Habría que distinguir entre las distintas formas de subvenciones y analizar sus efectos netos. Corea señaló que había que llevar a cabo estudios empíricos sobre las subvenciones a la pesca y sobre sus efectos en el comercio y el medio ambiente, pues los vínculos entre ambos no están claros. Dada la incertidumbre que entraña la determinación del nivel de capacidad suficiente para mantener el nivel adecuado de actividad pesquera, cabía dudar que la eliminación del apoyo financiero al fomento de la captura pesquera fuera una respuesta adecuada.

Respondiendo a la pregunta formulada por Corea de hasta qué punto el éxito de Islandia se debía a su sistema de ordenación de la pesca o a la ausencia de subvenciones, Islandia y Australia indicaron que una cuestión no se podía separar de la otra. Como indicaba Islandia en su documento, el sistema de ordenación de la pesca era una necesidad, pero no una condición suficiente para garantizar la pesca sostenible. Aunque Islandia había instaurado un riguroso sistema de ordenación de la pesca, habían faltado los incentivos económicos necesarios para conseguir que los interesados directos participaran en la consolidación de las prácticas pesqueras sostenibles. Los incentivos encaminados a reducir las capturas para concentrarse en la calidad y no en la cantidad del producto sólo surgirían si el sector se fundara en un régimen de competencia.

Silvicultura

El Canadá dijo que uno de sus principales objetivos consistía en eliminar la progresividad arancelaria en sectores fundamentales como, por ejemplo, el de los productos forestales. Las iniciativas "cero por cero" y de armonización de la Ronda Uruguay eran importantes, puesto que permitían a las empresas explotar su ventaja comparativa sin la distorsión derivada de la progresividad arancelaria. El documento de experiencia nacional del Canadá relativo a la silvicultura¹⁷ confirmaba el análisis del documento de Australia¹⁸ con respecto a la desviación de las corrientes comerciales debida a la progresividad arancelaria.

La eliminación de la progresividad arancelaria entre el Canadá y los Estados Unidos a raíz del Tratado de Libre Comercio del Canadá y los Estados Unidos había dado lugar a un desplazamiento relativo de la ventaja comparativa del Canadá hacia la producción de papel, con el consiguiente aumento de la eficiencia económica y ambiental. El Canadá hizo un llamamiento para que se acelerara la eliminación de las crestas arancelarias y la progresividad arancelaria, sobre todo respecto de los productos forestales.

¹⁷ WT/CTE/W/81-G/TBT/W/61.

¹⁸ WT/CTE/W/105, presentado en la sección de "observaciones generales" correspondientes al punto 6.

Cuero

El Brasil dijo que, mientras que los métodos tradicionales de curtir cuero crudo tenían una gran repercusión en el medio ambiente, la obtención de productos de cuero acabados no había provocado daños ambientales, pues se habían incorporado a esa producción métodos tecnológicos menos contaminantes. Para prevenir la contaminación causada por la producción de cuero había que aplicar una reglamentación ambiental más rigurosa. Los productores de cuero sólo podrían cumplir con la legislación ambiental si contaran con ingresos suficientes para invertirlos en tecnologías menos contaminantes. La progresividad arancelaria desanimaba a los productores de cuero a invertir en tecnologías más ecológicamente sostenibles. Las mejoras en el acceso a los mercados en este sector propiciarían el incremento de la producción de valor añadido, con lo cual aumentarían las posibilidades de inversión en tecnologías menos contaminantes. En este sector también podrían aplicarse otras medidas, como por ejemplo impuestos a la producción de cuero crudo, que se fundarían en el principio de "quien contamina paga" y generarían fondos que servirían para desarrollar tecnologías menos contaminantes.¹⁹

Punto 8 Disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

Un Miembro recordó las propuestas presentadas en la reunión del CCMA los días 23 y 24 de julio de 1998 destinada de examinar los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica y del Acuerdo sobre los ADPIC. La cuestión no estribaba en que estuvieran en conflicto el Acuerdo sobre los ADPIC y los AMUMA o en que se utilizara un acuerdo para garantizar el cumplimiento del otro. Las propuestas presentadas en la reunión de julio se inspiraban en la idea de que la intención de la comunidad internacional era aplicar estos acuerdos de forma que resultaran compatibles entre sí.

Otros asuntos

El PNUMA afirmó que, sobre la base del mandato que le había sido renovado en la reciente reunión de su Consejo de Administración, iba a redoblar esfuerzos en la esfera del comercio y el medio ambiente con los objetivos de: a) dar coherencia a las convenciones y convenios administrados por el PNUMA; b) preparar metodologías destinadas a llevar a cabo exámenes ambientales de liberalización del comercio; y c) potenciar la capacidad de los países en desarrollo en lo que respecta a incorporar el aspecto ecológico en las políticas comerciales. El PNUMA estaba redactando un acuerdo de cooperación entre las Secretarías de la OMC y del PNUMA. El PNUMA también esperaba con interés la organización conjunta de una reunión entre los órganos rectores de las convenciones y convenios administrados por el PNUMA y la Secretaría de la OMC, que se celebraría el 28 de junio de 1999, y la oportunidad de seguir participando en los seminarios regionales de la OMC sobre Comercio y Medio Ambiente.

Los Miembros expresaron su reconocimiento al Embajador Chak Mun See por la excelente manera en que había dirigido al Comité durante su presidencia y a la Sra. Sabrina Shaw por su importante contribución en su calidad de Secretaria.

FIN

¹⁹ Véase el documento citado por el Brasil, OMC (1998), *Trade and Tariffs in the Leather Sector*, Ginebra.